

ción urbana, etc., todos errores en los que se ha caído hasta ahora. El Estado debe asumir su papel, pero no sólo el papel del ejercicio del monopolio legítimo de la violencia, las políticas públicas estatales deben más bien generar puentes y acercamientos distintos con la sociedad civil. Esto va a permitir enfrentar el tema de la seguridad ciudadana por fuera de la estrecha visión de la "securitización" urbana, incorporando temas aparentemente ajenos a la seguridad pero íntimamente relacionados con ella como: calidad de vida, construcción de espacios de interculturalidad en la ciudad, las paradojas de las identidades, los rituales de reforzamiento de la coexistencia pacífica y también los relacionados con las dimensiones simbólica e imaginaria de los goces y las violencias que han existido, existen y seguirán existiendo en las sociedades humanas.

¿Tal vez un elemento que entraría en una política pública de este tipo sería el tema del "goce" que usted ha planteado?

Definitivamente sí. El tema de la convivencialidad urbana debe ser retomado para reconstruir el tejido social urbano, pues la ciudad es un espacio que aún posibilita usos placenteros y libidinales, cuya anulación voluntaria se ha convertido en el precio que nos han hecho creer que debemos pagar para poder estar a salvo y seguros, equiparando ideológicamente el disfrute y los goces únicamente con los riesgos. Mientras se siga manejando el tema por el lado del "encierno" y el temor al otro satanizado, se termina encerrando la propia vida y sus potencialidades en una especie de *ghettoización* individualista y paranoica. Por el contrario, se trata de activar en la conciencia ciudadana el derecho que se tiene al disfrute y al goce de la ciudad, esto es imprescindible para poder mejorar la calidad de vida urbana. Entonces, si a primera vista generar un aumento de las posibilidades de goce y disfrute de la ciudad, es decir apoyar el desate de las energías libidinales parecería ser totalmente contraproducente según la visión predominante actual, en realidad podría significar un giro radical no sólo para repensar el tema de la inseguridad ciudadana sino para empoderar a los sujetos urbanos, para que sean capaces de nuevamente "vivir" y no sólo "temer vivir" en la ciudad.

EN CORTO

De acuerdo a la Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas realizada el año 2001 por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, el 47% de la población mexicana se encuentra insegura en su lugar de residencia. Además, frente a la situación de inseguridad el 23% ha modificado su estilo de vida de la siguiente manera: el 61% evita salir de noche; el 44% evita cargar dinero en efectivo; el 37% ha dejado de utilizar joyas; el 27% ha dejado de visitar parientes y amigos que viven lejos de su lugar de residencia; entre otras.

Según un estudio realizado por ACTIVA en 1998, el 24% de los entrevistados en Río de Janeiro, el 26% en Santiago de Chile y el 46% en Cali han restringido las salidas en la noche debido al sentimiento de inseguridad.

Percepción y participación

Manuel Dammert Guardia

S e suele identificar dos procesos interrelacionados respecto a la seguridad "ciudadana": por un lado, los actos delictivos que se producen tanto en el espacio público como privado; y por otro lado, la percepción sobre la situación de inseguridad real o no, y como éstas se traducen en posibilidades de sufrir o ser parte de alguna de estas acciones. En este sentido, la percepción de inseguridad aparece como un factor "subjetivo". Pese a los intentos por problematizar la forma en que se constituye esta percepción, las preguntas siguen irresueltas por lo que solo se pueden plantear ciertos factores que guardan relación con esta "sensación".

Asimismo, en la mayoría de escenarios la percepción de inseguridad cuantificada adquiere niveles superiores a los propios niveles de actos delictivos cometidos. Así, según la encuesta realizada por "Apoyo" en abril de este año, en Lima el 83% de los habitantes se sienten inseguros en la calle y 41% al interior de sus hogares. Sin embargo, la misma encuesta muestra que sólo el 32% de los entrevistados ha sido asaltado en calle, y sólo el 14% ha sufrido un robo en su vivienda (Apoyo Opinión y Mercado 2007)¹. Esta diferencia resulta aun más evidente en el caso de Chile, dado que este país posee una de las tasas de violencia más bajas de la región junto a unos índices de percepción de inseguridad bastante altos. Sin embargo, como afirma Fruhling y Manzano para el caso chileno, "si bien este hecho podría considerarse como una contradicción, en efecto no lo es, puesto que más allá de las cifras la simple percepción del agravamiento de los problemas delictuales conduce a que la población desarrolle una sensación de temor. Agravamiento que es corroborado por la tendencia de incremento en las tasas de denuncias de la última década" (Varat y Galard 2006)².

Frente a este escenario, existen un conjunto de alternativas que vienen desarrollándose con el fin de disminuir los índices de percepción de inseguridad. Una de estas alternativas es la promovida por el Woodrow Wilson Center, la cual se centra en llevar a cabo un conjunto de proyectos de investigación e intervención con el fin de "analizar" los efectos que produce la participación ciudadana en relación a las políticas públicas de seguridad. En este sentido, la hipótesis planteada en estos proyectos es la siguiente: "la mayor participación de los ciudadanos en acciones preventivas incide en la baja percepción de inseguridad de los actores involucrados" (Varat y Garland 2006). Hipótesis que se cumpliría en los casos argentinos analizados por Alberto Fohrig, quien plantea que dos variables principales para entender los cambios en la percepción de inseguridad son: por un lado, las condiciones sociales en las que se produce la participación; y por otro lado, el grado de desarrollo de las capacidades estatales. Evaluando el conjunto de iniciativas promovidas por este programa, Smulovitz señala algunas lecciones a tomar en cuenta: "la solución al problema de la inseguridad comprende acciones públicas preventivas que involucran múltiples agencias (educación, bienestar social, justicia) y reformas estructurales de los organismos de la policía; para disminuir la sensación de inseguridad es necesario atender a los factores que erosionan la participación y debilitan el tejido social; es necesario reducir los obstáculos administrativos y burocráticos que dificultan la implementación de estos programas" (Varat y Galard 2006); entre otras.

1 Opinión Data. Resumen de Encuestas de Opinión Pública. 23 de Abril de 2007. Apoyo Opinión y Mercado. Año 7. Num. 87. http://www.ipsos-apoyo.com.pe/html/opinion_data.php

2 Varat, Jessica y Allison Garland. (Editores) (2006). Participación ciudadana y percepción de inseguridad en América Latina. Agosto. Latin American Program Special Report. Woodrow Wilson International Center for Scholars. http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/LAP_August.pdf